LA DEMOCRACIA: RAZON DE LA MAYORIA

José Fuentes García *

I. La Fundamentación Clásica y sus Críticos

Dos jurisconsultos romanos formularon el principio de mayoría con la admirable precisión que tenían aquellos hombres. Traduciré libremente sus palabras que el *Digesto* recogió. Ulpiano: "Se atribuye a la totalidad lo que públicamente ha decidido la mayoría" (*Refertur ad universos, quod publice fit per maiorem partem*). Mucius Scaevola: "Lo que ha dispuesto la mayor parte del consejo valdrá como si lo hubiese acordado la totalidad" (*Quod maior pars curiae effecit, proceo habetur, ac si omnes egerint*).

He aquí una vez más en funcionamiento el ingenioso recurso de la ficción o, si se prefiere, el de la presunción para hacer frente a la necesidad práctica guardando las formas de respeto a la vieja regla.

Pero la ficción necesita fundarse en una razón que la haga plausible ante el juicio crítico. No puede ser meramente fruto de la discreción de pensadores aislados, ni artificio impuesto arbitrariamente por dominadores de hombres.

Se ha de contestar a la interrogante distinguiendo dos fundamentos —o planos de fundamentación— que podemos denominar razón doctrinal o teórica y razón empírica o sociológica.

En su más pura versión, tal como se ha desarrollado en la historia del pensamiento político, el fundamento teórico estriba en

la creencia de que, en caso de discrepancia, la mayoría es quien aprecia lo verdadero o lo mejor. En cuanto esta creencia se halla socialmente compartida de un modo más o menos consciente e intenso, lo que decide la mayoría puede ser luego acatado por todos, o al menos por todos excepto un número no peligroso de disidentes, que tendrán al cabo que someterse si no quieren abandonar la colectividad afectada por la decisión.

Ante sus más ilustres defensores, esa creencia se impone casi con la fuerza de las verdades evidentes. Recordemos a Locke y a Rousseau. El primero escribió que "la resolución de la mayoría es aceptada como resolución de la totalidad de miembros, y por ley natural y de la razón se da por supuesto que obliga, por llevar dentro de sí el poder de la totalidad". La mayoría expresa lo que quiere el pueblo razonable, puesto que los hombres viven según la ley de la razón. Y como la existencia del cuerpo político es una necesidad natural, "es menester que el cuerpo se mueva de la forma que lo arrastra la mayor fuerza, que es el consentimiento de la mayoría".

El segundo, por su parte, afirmaba que, con base en el contrato social originario que justifica la existencia del cuerpo político, "la voz del mayor número obliga siempre a todos los demás". Esto es "una consecuencia del contrato mismo", pues lo que se pregunta a los votantes al someterles una cuestión, no es si aprueban tal o cual propuesta, sino si consideran que ésta "es

* Miembro fundador del Instituto de Administración Pública de Coahuila.

conforme o no a la voluntad general", esa voluntad que indica infaliblemente el verdadero bien del grupo. Aquel que votó en sentido contrario al de la mayoría deberá lógicamente concluir que se había equivocado en cuanto a lo que era la voluntad general, es decir, el verdadero bien del grupo. De nuevo, como vemos, es la fe optimista en la racionalidad del ser humano quien establece el último punto de apoyo.

Con independencia de si esta fe en la indefectible racionalidad del mayor número ha estado alguna vez compartida de modo absolutamente general y duradero en un medio social, el hecho cierto es que se ha ido debilitando a medida que el análisis realista se ha enfrentado con ella. No estará de más repasar brevemente un surtido repertorio, que no pretende ser exhaustivo.

En un pequeño libro dedicado recientemente a nuestro tema, el profesor francés Claude Leclercq evoca el verbo tonante de su compatriota André Tardieu, que en las postrimerías de la III República fustigaba la interpretación aritmética de la soberanía nacional. ¿Por qué —decía— hemos de sentirnos obligados a reconocer "que un millón de errores individuales puedan equivaler a una verdad"? En efecto: el simple uso del sentido común nos enseña que la mayoría puede equivocarse, y gravemente, por falta de conocimiento cabal de la materia sobre la que ha de pronunciarse. No hacen falta más comentarios.

Como no es malo repetir muchas veces las grandes verdades, señalemos de nuevo ese tremendo peligro que Tocqueville denunció dándole el nombre de "tiranía de la mayoría". Repitamos aquella opinión suya de considerar como "impía y detestable esa máxima de que, en materia de gobierno, la mayoría de un pueblo tiene el derecho de hacerlo todo".

No están libres los regímenes políticos más liberales de que en su vida se den casos como el de una excelente película que protagonizó Henry Fonda y dirigió William A. Wellman: *Incidente en Ox-Bow*. Aquellos hombres habían salido en partida para

linchar a los presuntos culpables de un robo de ganado y un asesinato, después de jurar todos someterse a lo que decidiera la mayoría. Tras hallar a quienes suponían autores de las presuntas fechorías, una precipitada indagación, donde el apetito destructor de venganza supo convertir en pruebas concluyentes lo que sólo eran indicios fragmentarios o apariencias, desembocó en una decisión mayoritaria de ahorcamiento, que se ejecutó sin apelación posible. Muy poco después, el espontáneo tribunal pudo adquirir una convicción clara y plena sobre el exacto significado de lo que acababa de hacer. La mayoría se había equivocado esta vez, pero el error era ya irreparable.

Podríamos también decir mucho sobre esa opinión, tan frecuente como aturdidamente repetida, de que el interés de los más debe prevalecer sobre el interés de los menos, y más aún frente al interés de uno solo. ¿Qué reglas de evidencia conducen a este juicio apodíctico sin que antes se haga una serie de cuidadosas distinciones?

Uno se pregunta si no será cierto, lo que decía Pascal, que si se obedece a la pluralidad no es porque tenga más razón sino porque tiene más fuerza.

Comprendiendo éstas y parecidas dificultades, algunos pensadores políticos han moderado aquella creencia básica de esta manera: debe decidir la mayoría porque determina lo mejor, al menos la mayoría de las veces. Pero, aunque esto fuera cierto, no se podrían eludir otras graves objeciones.

II. Ensayo sobre una nueva fundamentación

En nuestro pensar común, siguiendo los vericuetos del principio de mayoría, hemos logrado una conclusión en cuanto a su fundamentación teórica. Esta es la respuesta: el principio de la mayoría existe porque es una regla convencional o técnica para la convivencia.

Naturalmente, al implantar esta regla de convivencia se confía en que la mayoría pueda muchas veces determinar lo mejor; pero se aceptan con prudentes reservas las

posibilidades de error; porque se estima que es humano el equivocarse; porque se piensa que, si hubiese que elegir, sería preferible aceptar la equivocación de muchos a que muchos tuviesen que soportar los errores de unos pocos; porque, en todo caso, la personalidad moral y el sentido de libertad creadora de los ciudadanos —o los componentes de cualquier otro grupo— se forman precisamente a través de esa aventura en que se suceden aciertos y se intercalan errores; porque, allí donde las deliberaciones de un órgano colegiado no ofrecen perspectivas de que se pueda llegar a un acuerdo entre las posiciones u opiniones divergentes, hay que zanjar de algún modo los asuntos en cierto momento, aunque sea valorando el hecho en sí de que los más se inclinan en tal dirección. Por otra parte, y con respecto a los casos en que se deciden puras cuestiones de gustos, se piensa que, al no ser posible satisfacer a todos, será en general preferible contentar al mayor número, aunque mañana se deba decidir lo contrario por haberse alterado la distribución de las aficiones.

Con prudentes reservas, he dicho, se aceptan las posibilidades de error. Esta prudencia se ha ido enriqueciendo con el tiempo gracias a la experiencia creciente lograda sobre los falseamientos del principio de mayoría y los extravíos causados por su ingenua o malintencionada utilización. Al final enunciaré las principales cautelas que al respecto se pueden considerar recomendables.

Examinemos ahora la naturaleza que tiene el acto de implantación de nuestro principio. Aquí podemos plantear el tema formulando una pregunta que es filial de la gran cuestión que nos ha venido guiando: ¿Quién decide que se decida por mayoría?

Contemplando como una regla técnica de convivencia, el principio de mayoría es un criterio resolutorio que, en el supuesto ideal o más lógico, es aceptado y acordado unánimemente por todos cuantos componen el grupo en que ha de regir. Bien expresó este punto John Locke, a quien ya

cité, cuando decía que “todos cuantos consienten en formar un cuerpo político bajo un gobierno aceptan ante todos los miembros de esa sociedad la obligación de someterse a la resolución de la mayoría y dejarse guiar por ella”.

III. Conclusiones preceptivas con relación al principio de mayoría

Después de siglos de experiencia y cuantiosos esfuerzos de análisis intelectual, los tratadistas interesados han ido depositando en el tesoro cultural de la Humanidad un valioso haz de conclusiones preceptivas con relación al empleo del principio de decisión por mayoría en la vida social. Por nuestra parte, podemos considerar aquí suficiente un breve resumen de las principales.

Merece ocupar el primer puesto esta recomendación: que se excluyan del campo de aplicación del principio de mayoría diversas materias respecto a las cuales todos los asociados o algunos de ellos no consentirían jamás en determinadas renunciaciones, porque en tales materias ven comprometidos valores consustanciales a su concepción fundamental del mundo y de la vida.

Hallamos, de hecho, marcados límites de este tipo en el reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales de libertad de las personas en cuanto tales. Con este reconocimiento se precisan aquellos aspectos de la vida respecto a los cuales no se podrán poner determinadas obligaciones o prohibiciones a las personas, ni siquiera mediante votaciones populares directas, y menos aún, por tanto, mediante decisiones mayoritarias en el seno de órganos colegiados representativos.

Luminosamente expresó esto en 1943 el juez Jackson, del Tribunal Supremo norteamericano, al redactar su opinión discrepante frente al punto de vista que había prevalecido en una sentencia. Decía que los derechos fundamentales del hombre “no pueden ser objeto de un sufragio popular o de otra votación cualquiera”.

Estos derechos, añadía, "se sitúan en un plano diferente y superior, y no consentirían en verse subordinados a la expresión de la voluntad del pueblo o de sus representantes". Schumpeter, por su parte, escribió que "existen ideales e intereses supremos que el más ardiente demócrata sitúa por encima de la democracia", confiando en que la democracia servirá precisamente para garantizarlos.

Segunda directriz: que se adopten seguridades para garantizar la libre actuación de quienes hayan de participar en las decisiones, de modo que su actitud no esté mediada por otros. Como regla, el voto secreto ha de ser preferido al oral o de signos externos. Sólo cuando sean claramente de temer peligros de irresponsabilidad o predominio de ambiciones personales habrá que inclinarse sin vacilar por el voto manifiesto.

Si ahora recordamos que el ideal de la unanimidad subyace en todas las aplicaciones del criterio mayoritario, convendremos en lo siguiente: que para las decisiones de mayor trascendencia se ha de exigir por lo menos la mayoría absoluta (es decir, la mitad más uno de los que tienen voto), e incluso en ocasiones, aquella mayoría que, siendo asequible en condiciones normales, se acerque lo más posible a la unanimidad. Así lo propuso Rousseau, que aconsejó al mismo tiempo la mayoría simple para los casos que requieren una decisión rápida.

No menos importante es que, en las ordenaciones electorales referentes a la constitución de cuerpos representativos, se establezcan sistemas electorales que permitan a las minorías organizadas hacerse oír en las deliberaciones de gobierno e influir de algún modo en las decisiones mayoritarias que hayan de adoptarse.

Ideal sería, sin duda, la existencia de una perfecta homogeneidad de caracteres en el ámbito social afectado; pero dejando aparte las dificultades derivadas de la

condición humana, se ha de renunciar a la tentación de imponerla por la fuerza, acomodando en cada momento la práctica del sufragio a las circunstancias sociales existentes. Al mismo tiempo, y con vistas a la creciente fertilidad de los medios de participación, se han de aportar a la vida social los medios de progreso que incrementen la homogeneidad. He aquí la razón por la que, digan lo que digan algunos apóstoles del verbalismo democrático, el enriquecimiento de las prácticas de decisión por mayoría se ha de supeditar, en buena medida, al desarrollo económico y cultural de los pueblos.

Pero más necesario aún que ese desarrollo es el empeño por educar cívicamente a los ciudadanos y asegurarles una información variada y fidedigna, de modo que estén en condiciones de enjuiciar adecuadamente los asuntos en que hayan de decidir y no se dejen ganar la voluntad por maniobras de sugestión o amenazas de minorías interesadas.

Hemos llegado al final de nuestras reflexiones. Claro, sólo visto que el principio de decisión por mayoría es un instrumento delicado cuyo uso no se debe confiar a mentes inmaduras, manos torpes o intenciones tortuosas. Bien empleado es una bella muestra de la cultura humana y un camino excelente para la libertad; mal aplicado se convierte en un vil servidor de pasiones y un nefasto artificio de la tiranía.

Porque no hay tal vez mayor tiranía que la de quien no se conforma con imponer a otros su voluntad, sino que, invocando un derecho absoluto de la mayoría, persigue incluso la humillación de los discrepantes hasta el punto de hacerles confesar sus culpas por no haber comprendido que la verdad estaba en el mayor número y no haberse sometido con docilidad a sus dictados.